TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 294/96, relativo a la dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado Chilillos, Municipio de Rosario, Sin.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 294/96, que corresponde al expediente administrativo 1979, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Chilillos", ubicado en el Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa; en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada el trece de mayo de dos mil dos, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el Amparo Directo número D.A. 1985/2000, promovido por Irma Torres de Solís, José Torres Vargas y la Sucesión testamentaria a bienes de la señora Martina Torres Vargas, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito de cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, un grupo de campesinos del poblado "Chilillos", Municipio Rosario, Estado de Sinaloa, solicitó al gobernador de dicha entidad federativa, dotación de tierras, señalando como de posible afectación los terrenos que se localicen dentro del radio legal de siete kilómetros.

SEGUNDO.- El ocho de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, la Comisión Agraria Mixta en la entidad, instauró el procedimiento respectivo, bajo el expediente número 1979; giró los avisos correspondientes; asimismo, se ordenó la publicación de la solicitud de tierras, la cual se hizo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente a la edición número 46, del dieciséis de abril de ese mismo año.

TERCERO.- Para elaborar el censo agrario, por oficio número 530, de veintiocho de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, la Comisión Agraria Mixta, designó al topógrafo Armando Córdoba O., quien rindió su informe en relación a los trabajos efectuados, el siete de abril de ese año, haciendo saber la existencia de sesenta y cuatro individuos capacitados, quienes cuentan con algunas cabezas de ganado mayor y menor, mismas que pastorean en los terrenos solicitados desde hace varios años. Anexando a su informe acta de clausura de la junta censal.

CUARTO.- Por acuerdo del Gobernador del Estado de Sinaloa, mediante oficios 1734, 1735 y 1736, de siete de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se expidieron los nombramientos para los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, en favor de Loreto Olea Hernández, Florentino García Espinoza y Dionisio Torres Quintero, como presidente, secretario y vocal, respectivamente.

QUINTO.- La Comisión Agraria Mixta en el Estado, el trece de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, por oficio 1116, instruyó al topógrafo Ubaldo Alonso Yáñez A., para la realización de los trabajos técnicos e informativos respectivos; rindiendo su informe el diecinueve de septiembre de ese mismo año, en el que manifiesta:

"...En cumplimiento a la comisión conferida, me trasladé al poblado de referencia, procediendo a localizar dentro del radio legal de afectación al citado pueblo, las siguientes fincas rústicas en los predios que a continuación se mencionan:.- PREDIO "PONCE". Un lote de terreno propiedad del Sr. José Torres Ornelas, con una superficie de 586-00-00 Has. de monte susceptible de cultivo al temporal de las cuales 80-00-00 Has., están abiertas al cultivo.- Un lote de terreno propiedad de José Torres Vargas, con una superficie de 586-00-00 Has., de monte susceptible de cultivo al temporal de las cuales aproximadamente 40-00-00 Has., están abiertas al cultivo.- Un lote de terreno propiedad de la Sra. Martina Vargas Quevedo, con una superficie de 586-00-00 Has., de las cuales 186-00-00 Has., son de monte susceptible de cultivo al temporal, el resto o sea 400-00-00 Has. son de agostadero cerril de buena calidad.- Cabe aclarar que los tres lotes de terreno antes descritos se encuentran formando una sola unidad ya que no se encontraron brechas ni mojoneras que delimiten cada lote.- PREDIO "CHILILLOS".- Manuel y Anastacio Rivera, son propietarios de un lote de terreno con superficie de 100-00-00 Has. de monte susceptible de cultivo al temporal.- Lote de terreno propiedad de Juana Luna, con superficie de 58-00-00 Has. de temporal.- Lote de terreno propiedad de Manuel López G. y Jesús G. Gutiérrez, con superficie de 86-00-00 Has. de temporal.- PREDIO "CAMPANILLAS".- Lote propiedad de Hilario López, con superficie de 393-51-50 Has., de monte susceptible de cultivo al temporal.- PREDIO "EL TAMARINDO".- Lote propiedad de Bruno López S., con superficie de 328-48-29 Has. de monte susceptible de cultivo al temporal.- Lote propiedad de Petra Rodríguez, con superficie de 74-46-59 Has., de agostadero cerril con pequeñas porciones laborables.- Lote de terreno propiedad de Herederos de Mauricio Rendón, con superficie de 546-00-00 Has., de agostadero cerril con pequeñas porciones laborables.- Lote propiedad de Antonio Rendón y Hermanos, con superficie de 546-00-00 Has., de agostadero cerril con pequeñas porciones laborables.- Lote propiedad de Miguel Rendón y Condueños, con superficie de 656-59-00 Has., de agostadero cerril con pequeñas porciones laborables.- Lote

propiedad de Mauricio Rendón A., con superficie de 656-96-00 Has., de agostadero cerril con pequeñas porciones laborables...".

Anexa a su informe cédula notificatoria común, de veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, y plano informativo.

SEXTO.- Mediante escritos de veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, Manuel Rivera y Anastacio Rivera, comparecieron al procedimiento aportando pruebas y alegatos en defensa de sus respectivas propiedades, anexando como pruebas copias certificadas de escrituras públicas y copias simples de los planos correspondientes.

Asimismo, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, en representación de José Torres Vargas, José Torres Ornelas, Martina Vargas Quevedo, Jesús B. Gutiérrez Rendón, Manuel López Gaytán, Felipe A. Lizárraga, Hilario López González y José María Pimienta González, mediante diversos escritos de once de septiembre, diez y veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, presentó pruebas y alegatos en defensa de los intereses de sus agremiados, argumentando que las fincas propiedad de sus representados, no rebasan los límites de la pequeña propiedad, según lo establecido en la Ley Federal de Reforma Agraria, y que se encuentran en debida explotación y aprovechamiento, dedicados a la ganadería y que dichos terrenos se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad del Municipio de Rosario, Sinaloa, anexando como pruebas documentales para reforzar su dicho: Copias certificadas de las escrituras públicas; certificaciones expedidas por las Oficinas del Registro Público de la Propiedad de Rosario, Sinaloa; constancias expedidas por la Asociación Ganadera Local de ese Municipio, en las que los acreditan como socios de la misma, y copias de los planos de sus respectivos predios.

SEPTIMO.- Al detectar irregularidades en el censo levantado el siete de abril de mil novecientos sesenta y ocho, la Comisión Agraria Mixta en la entidad, instruyó a Cesario Uriarte Beltrán, a efecto de llevar a cabo una rectificación censal en el poblado del núcleo peticionario; dicho comisionado rindió su informe el primero de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, del que se desprende:

"...Con fecha 29 del anterior mes de septiembre se llevó a cabo la actualización del Censo General y Agropecuario del poblado de referencia, el cual se hizo conforme a la convocatoria y cédula notificatoria al Comité Ejecutivo Agrario la primera y la segunda que notifican a los dueños o encargados del predio en afectación en el radio de siete kilómetros; no habiendo comparecido ninguna representación de los dueños de los terrenos, ni de parte de la Liga de Comunidades Agrarias.- El acto de referencia se llevó a cabo sin incidente alguno, terminando el mismo a las 16.50 horas del día de la fecha, resultando los datos que en seguida se expresan.- NUMERO TOTAL DE HABITANTES 200.- NUMERO TOTAL DE JEFES DE FAMILIA 41.- NUMERO TOTAL DE CAPACITADOS 63.- Se adjunta al presente ocho fojas útiles del censo; Convocatoria al Comité Ejecutivo Agrario; Cédula Notificatoria; Acta de elección del Repte. Censal del poblado; Acta de inspección de la junta censal; Acta de Clausura de los Trabajos Censales."

OCTAVO.- La Comisión Agraria Mixta en el Estado, aprobó dictamen positivo, el quince de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, proponiendo la afectación de 1,279-99-79 (mil doscientas setenta y nueve hectáreas, noventa y nueve áreas, setenta y nueve centiáreas) de monte susceptible de cultivo al temporal, tomadas de la forma siguiente: 386-00-00 (trescientas ochenta y seis hectáreas) del predio "Ponce", propiedad de José Torres Vargas; 386-00-00 (trescientas ochenta y seis hectáreas) del predio "Ponce", propiedad de José Torres Ornelas; 186-00-00 (ciento ochenta y seis hectáreas) del predio "Ponce", propiedad de Martina Vargas Quevedo; 128-48-29 (ciento veintiocho hectáreas, cuarenta y ocho áreas, veintinueve centiáreas) del predio "El Tamarindo", propiedad de Bruno López Padilla; 193-51-50 (ciento noventa y tres hectáreas, cincuenta y un áreas, cincuenta centiáreas) del predio "Rincón de Campanillas", propiedad de Hilario López; con base en lo establecido en el párrafo tercero, parte primera y fracción XII del artículo 27 constitucional y el artículo 104 del Código Agrario, en relación con el 106 del ordenamiento legal invocado; el cual fue sometido a la consideración del Gobernador de la Entidad, quien el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, confirmó en sus términos el dictamen del citado órgano colegiado. El mandamiento del ejecutivo local, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, el veintinueve del mismo mes y año, en el número 143, tomo LXI.

NOVENO.- La Comisión Agraria Mixta, mediante oficio número 1533, de veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, ordenó al topógrafo Antonio Valdez González, practicar la entrega provisional de las tierras contempladas en el mandamiento del gobernador de la entidad; del informe que se rindió el dos de diciembre de ese mismo año, se desprende que se hizo entrega formal al núcleo gestor, de la superficie total de 1,279-99-79 (mil doscientas setenta y nueve hectáreas, noventa y nueve áreas, setenta y nueve centiáreas) de monte susceptible de cultivo al temporal. Corre agregado en autos, acta de posesión

provisional de veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, signada por el propio comisionado, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, Comité de Vigilancia y solicitantes, certificada por el Agente Municipal del poblado "Chilillos" y el Presidente y Secretario de la Comisión Agraria Mixta en el Estado.

DECIMO.- Mediante diversos escritos de veintisiete de enero y dieciséis de febrero de mil novecientos setenta, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, en representación de Alfredo Rendón Moreno, Roberto Rendón Moreno, Cirilo Moreno, Angela Rendón de Rodríguez, Ignacia Rendón de Lizárraga, María Rosario Rendón de Mora y Francisca Rendón de Flores; así como por escritos de veinticuatro de enero, quince y veinte de julio y veinte de octubre de ese mismo año, por su propio derecho comparecieron Dora Laura López Sotomayor, José Torres Vargas, Martina Vargas Quevedo, José Torres Ornelas, Hilario López, Bruno López Padilla y Dora Laura López Sánchez; todos ellos, en términos generales argumentando en defensa de sus respectivos predios, que son pequeños propietarios y que sus terrenos son de agostadero áridos, mismos que los dedican a la ganadería, acompañando como pruebas documentales, copias certificadas de las escrituras públicas que amparan sus propiedades, constancias expedidas por la Asociación Ganadera Local del Municipio de Rosario, Sinaloa, certificaciones expedidas por las oficinas del Registro Público de la Propiedad del mismo municipio y estado y planos de sus respectivos predios.

DECIMO PRIMERO.- A efecto de realizar los trabajos de apeo y deslinde para la ejecución material de la superficie concedida por el mandamiento gubernamental de veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Comisión Agraria Mixta destacó mediante oficio 591 de trece de julio de mil novecientos setenta, al topógrafo Roberto Ceballos Famaña, el cual rindió su informe respectivo el cuatro de febrero de mil novecientos setenta y uno, del que se conoce:

"...DESLINDE.- De conformidad con el Oficio de comisión mencionado, Plano Proyecto formulado y aprobado por la Comisión Agraria Mixta y Mandamiento Gubernamental y estando presentes la mayoría legal del total de ejidatarios del poblado mencionado identificaron la superficie; al tratar de pasar al terreno para verificar el Deslinde del Ejido que se dota, se presentaron los dueños de predios afectados reclamando el derecho a escoger la localización de sus propiedades respetadas, alegando que con base al Artículo 105 del Código Agrario vigente, ejercieron este derecho oportunamente, los ejidatarios en estas condiciones se negaron al Deslinde alegando que si los propietarios escogían la superficie respetada, el terreno que quedaría al Ejido no llena las necesidades de su pueblo por ser éstos de muy baja calidad en los cuales se encuentra una pequeñísima fracción de tierra laborable, además no tendrían dónde formar su poblado por carecer de agua, no obstante de haberles hecho saber la conveniencia para llevar a cabo el mencionado Deslinde se siguieron negando, por lo tanto no pude llevar a cabo el Deslinde a la Dotación Provisional de Ejido al poblado que se trata, levantándose Acta Negativa...".

Anexa a su informe la mencionada acta de primero de enero de mil novecientos setenta y uno.

DECIMO SEGUNDO.- El Delegado Agrario en el Estado, previo resumen del expediente, emitió su opinión el once de octubre de mil novecientos setenta y tres, en la que consideró confirmar en todas y cada una de sus partes el mandamiento del Gobernador del Estado, turnando el expediente respectivo al Cuerpo Consultivo Agrario mediante oficio 10144 de veinticinco del mismo mes y año, para su trámite subsecuente.

DECIMO TERCERO.- En sesión celebrada el veinte de febrero de mil novecientos setenta y seis, el pleno del Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó acuerdo en relación con el expediente y la acción agraria de que se trata, ordenando la realización de trabajos técnicos e informativos complementarios, en los que se investigue la condición real de los predios propuestos en afectación.

En cumplimiento a lo anterior, la Delegación Agraria en el Estado, destacó por oficio V-3672, de dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y seis, al ingeniero Armando E. Apodaca Soto, para el efecto de atender las instrucciones contenidas en el acuerdo que antecede; quien a su vez por oficio 058/76, ordenó al ingeniero J. Roberto González Solórzano, realizara los mencionados trabajos, quien rindió su informe el dieciocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete, del que se conoce haber desahogado la tarea concedida, resultando:

"...Una vez apercibido de la Comisión conferida me trasladé al poblado "CHILILLOS", Municipio de Rosario, de esta Entidad Federativa, solicitando información de los predios afectados al Registro Público de la Pequeña Propiedad informándome en oficio No. 072/977 de fecha junio 6 de 1977, en el cual se me informa que el C. JOSE TORRES VARGAS tiene una superficie de 404-80-99 has., según libro 49 inscripción 194, secc. 1ra. con fecha 19 de septiembre de 1974; el C. JOSE TORRES ORNELAS, tiene registradas a su nombre una superficie de 420-44-04 has., según libro 49 inscripción 194 secc. 1ra. con fecha 19 de septiembre de 1974; MARTINA V. DE TORRES tiene registradas a su nombre 416-37-33 has., libro 49

inscripción 194 libro 49 secc. 1ra. con fecha 19 de septiembre de 1974; HILARIO LOPEZ tiene registrado una superficie de 393-51-50 has. libro 29 inscripción 22, secc. 1ra. de fecha 27 de octubre de 1949; tiene una nota que dice paso a propiedad de la SRA. MA. ESTHELA O. DE RODRIGUEZ, según inscripción 12 del libro 48 secc. 1ra. de fecha 27 de septiembre de 1972, BRUNO LOPEZ PADILLA tiene una superficie de 100-00-00 has. libro 39 inscripción 76 secc. 1ra. de fecha 27 de mayo de 1960; no especificando calidad de tierras.- Una vez constituido en el poblado en mención procedí a citar a los colindantes así como a los propietarios de los predios afectados y una vez reunidos comprobamos sobre el terreno y con la Documentación correspondiente de cada uno de ellos que no sobreponen a ningún colindante de los predios afectados respecto al plano informativo elaborado por el C. ING. JULIAN D. ARTEAGA RIVERA, comprobando asimismo, que los predios afectados no están demarcados en su superficie afectada no existiendo acta de deslinde únicamente acta de posesión provisional levantada el día 25 de noviembre de 1969, por tal motivo no se puede determinar cuál es la superficie dotada al Ejido en virtud de que no se encuentra en posesión de ningún terreno.- Habiendo comprobado que no existía sobreposición alguna con los colindantes de los predios afectados procedí a localizar la propiedad del C. BRUNO LOPEZ PADILLA, quien tuvo a su nombre una superficie de 546-39-58 has., de las cuales 217-91-29 Has., que las adquirió del Sr. LUIS DURAN FERNANDEZ el día 20 de octubre de 1954, mismas que vendió a su hija DORA LAURA LOPEZ SANCHEZ, el día 5 de diciembre de 1966, así como también con los 328-48-29 has. restantes las adquirió el día 14 de febrero de 1956 de la Sra. ELISA GUTIERREZ DE DIAZ, de las cuales 200-00-00 Has., las vendió al C. MANUEL LOPEZ GAYTAN y al señor FORTINO LOPEZ SANCHEZ éste representado por sus padres HILARIO LOPEZ GONZALEZ y MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ DE LOPEZ, el día 17 de diciembre de 1970, por lo tanto le restan 128-48-29 Has., que fueron afectadas por Mandamiento Gubernamental de fecha 20 de noviembre de 1969, beneficiando al poblado de "CHILILLOS", Municipio de Rosario de esta Entidad Federativa las cuales se encuentran enmontadas ya que no han entrado en posesión los campesinos beneficiados; cabe hacer la aclaración que el C. BRUNO LOPEZ PADILLA dona y cede una superficie de 210-00-00 Has. de terreno de agostadero susceptible de cultivo al temporal con todas sus acciones, usos y costumbre y servidumbre al ejido "CHILILLOS", Municipio de Rosario de esta Entidad Federativa, aunadas a las 128-45-29 has., afectadas por el Mandamiento Gubernamental tantas veces citado acto que fue certificado por el C. Presidente Municipal, el C. Diputado de Distrito y el Presidente del Comisariado Ejidal.- Una vez investigado las propiedades y compraventa y donaciones del C. BRUNO LOPEZ PADILLA encontré que, los afectados por el mismo Mandamiento Gubernamental, los Sres. JOSE TORRES ORNELAS, quien adquirió por concepto de donación de la Sra. HERLINDA PAREDES VDA. DE CHAVARRI, dueña de una tercera parte de un total de 1,758-00-00 has., mismas que le dona en forma pura, el día 6 de julio de 1968; la SRA. MARTINA VARGAS DE TORRES quien adquirió de la Sra. HORTENSIA PAREDES VDA. DE GAXIOLA dueña de una tercera parte de un lote de 1,758-00-00 has., mismas que le dona en forma pura y simple el día 21 de febrero de 1969, al final de cada una de las escrituras dice: Habiéndoles Advertido la obligación que tienen de inscribirlo en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad, se encuentran registradas el día 19 de septiembre de 1974...".

Anexa a su informe, entre otra documentación, informe del Registro Público de la Propiedad, copias de los citatorios a los colindantes y plano informativo de los predios investigados.

DECIMO CUARTO.- Posteriormente, de la revisión al expediente que nos ocupa, el Cuerpo Consultivo Agrario detectó diversas irregularidades que lo imposibilitan para emitir su dictamen, por lo que el treinta de octubre de mil novecientos setenta y ocho, dictó acuerdo, ordenando trabajos técnicos e informativos tendientes a aclarar la contradicción que prevalece en cuanto a la calidad de los terrenos propuestos en afectación, tipo de explotación, superficie y régimen de propiedad; para lo cual la Delegación Agraria en el Estado, instruyó mediante oficio V/24138, de veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, al ingeniero José María Espinoza Alvarez, quien rindió su informe el veinticuatro de agosto de ese mismo año, del que se conoce:

"...TRABAJOS REALIZADOS.- Una vez documentado ampliamente al respecto, procedí a trasladarme al poblado que nos ocupa, entrevistándome con las Autoridades del ejido y darles a conocer el motivo de la comisión, a lo cual argumentaron que ellos están de acuerdo con los trabajos Técnicos e Informativos siempre y cuando únicamente se lleven a cabo dentro de los terrenos que les fueron dotados en Primera Instancia y que aún no los poseen ellos; sino los propietarios afectados, así también dieron a conocer que no les interesan las demás fincas rústicas del Radio Legal, ya que consideran que son auténticas Pequeñas Propiedades.- Primeramente se procedió a notificar a los Pequeños Propietarios de fincas rústicas que se encuentran afectadas según Mandamiento Gubernamental de fecha 20 de Noviembre de 1969, y según inspecciones practicadas se encuentran de la siguiente manera:- JOSE TORRES VARGAS.- Propietario de 404-80-94 Has., de las cuales se encontraron aproximadamente 15-00-00 Has., sembradas de mango

y varias fracciones chicas sembradas de maíz, dichas fracciones se encuentran distantes unas de otras acumulando aproximadamente unas 40-00-00 Has., entre todas, estas fracciones constituyen terrenos bajos, temporal aluvión de segunda calidad y el resto del terreno son lomeríos cerriles de agostadero, no encontrándose ninguna cabeza de ganado en su interior; la fauna que predomina en la región es: vara blanca, ocote, mezquitillo, palo blanco, zacate, alambre de púas y postería en toda su extensión.- JOSE TORRES ORNELAS.- Con superficie de 404-80-94 Has., de agostadero cerril, con pequeñas fracciones abiertas al cultivo de temporal, en lo que respecta a sus partes bajas, dichas fracciones se encuentran sembradas de maíz, y cacahuete, explotándolas ejidatarios del ejido de "CHILILLOS", la fauna que predomina en esta región es la vara blanca, ocotillo, mezquitillo, zacate liebrero etc., en lo que respecta a la calidad de las tierras "fracciones" abiertas al cultivo son de aluvión preñoso, consideradas de segunda calidad y el resto del terreno de monte, la mayor parte agostadero cerril de buena calidad; no se encontró ninguna cabeza de ganado en toda su extensión, dicho lote se encuentra cercado en toda su extensión.- MARTINA VARGAS DE TORRES.- Con superficie de 416-37-33 Has., de agostadero y monte cerril, encontrándose pequeñas fracciones de terreno abiertas al cultivo de temporal con siembras de maíz y cacahuete, sembradas por ejidatarios del ejido "CHILILLOS". El resto del terreno se constituye de el zacate liebrero, vara blanca, ocotillo mezquitillo, guasimilla etc., dicho terreno se encuentra delimitado por medio de postería y alambre de púas de cuatro hilos.- HILARIO LOPEZ.- Con superficie de 393-51-50 Has., de agostadero y monte cerril, de las cuales 200-00-00 Has., de agostadero susceptible al cultivo de temporal, se encuentran en posesión del ejido "CHILILLOS", sembradas en pequeñas fracciones planas y semiplanas de maíz y cacahuete. El resto del terreno se encuentra explotado por el propietario, utilizándolo como agostadero, ya que en su mayor parte es cerril, se encontraron aproximadamente 70 cabezas de ganado mayor con la marca de fierro de herrar H y SS, una casa de materia, corral con cerco de madera, la calidad de este terreno es de agostadero cerril de buena, se encuentra cercado en toda su extensión.- MANUEL LOPEZ GAYTAN Y FORTINO LOPEZ SANCHEZ.- Con superficies de 100-00-00 Has. cada uno, de monte y agostadero cerril, de las cuales tienen aproximadamente 40-00-00 Has. sembradas de mango, en terrenos de temporal tipo aluvión, consideradas de primera calidad y el resto del terreno se compone de agostadero cerril no apto para la agricultura. Dichos terrenos se encuentran delimitados por cercos con alambre de púas de cuatro hilos, la fauna que predomina son vara blanca, zacate liebrero, ocotillo, mezquite, etc.- NOTA.- Estas fracciones de terreno pertenecían al Sr. BRUNO LOPEZ PADILLA, mismas que vendió al Sr. HILARIO LOPEZ, vendiéndolas dicho Sr. a sus hijos MANUEL LOPEZ GAYTAN Y FORTINO LOPEZ, en fecha 17 de diciembre de 1970.- Por otra parte se hace la aclaración de la supuesta donación que hace el Sr. BRUNO LOPEZ PADILLA al ejido "CHILILLOS", DE 210-00-00 Has., los ejidatarios no reconocen haber aceptado ni haber firmado ninguna documentación al respecto, por lo tanto demuestran su inconformidad mediante escrito de fecha 6 de agosto del año en curso y del cual manifiestan lo siguiente:- Por medio de la presente y en representación de los demás integrantes del ejido, damos a conocer a las Autoridades competentes, que no reconocemos la supuesta Acta de Donación de 210-00-00 Has., hechas por el Sr. BRUNO LOPEZ P., ya que nosotros nunca hemos firmado un documento al respecto y desconocemos dicha Acta, ya que posiblemente se había (sic) sin ningún consentimiento de nuestra parte; es por esto que solicitamos a quien corresponda deje sin efecto lo que nosotros no reconocemos y se nos dote tal y como deber ser.- BRUNO LOPEZ PADILLA.- Lote con superficie de 100-00-00 Has. de agostadero cerril de buena calidad, se encontraron en pequeñas fracciones de terreno sembradas de maíz de temporal, encontrándose éstas en las partes más bajas de dicho polígono, el resto del terreno se compone de agostadero cerril, encontrándose 12 cabezas de ganado mayor, con la marca de fierro de herrar H y SS; la fauna que predomina en esta fracción es ocotillo, zacate liebrero, vara blanca, guasimillas, etc.- NOTA.- Las colindancias de los lotes investigados se encuentran descritas en las Actas de Inspección Ocular, que se anexarán a este informe.- Así también se hace la aclaración que en fecha 20 de julio del año en curso, se giró Oficio al C. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Rosario, Sinaloa, solicitándole proporcione datos sobre fincas rústicas de las personas a investigar; y a la fecha aún no se han recibido en esta Delegación dichas certificaciones. Lo anterior es con el fin de que al recibirse se integren al expediente para su complementación. Así como también los datos catastrales y de la Asociación Ganadera y las Pruebas y Alegatos que presenten los que a sus derechos convengan...".

DECIMO QUINTO.- Mediante escritos de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la Asociación de la Pequeña Propiedad del Estado de Sinaloa, en representación de Anastasio Rivera Lizárraga, José María Pimienta, José María Pimienta González, Roberto Rodríguez Luna, José Torres Vargas, Ricardo Rodríguez Becerra, María del Carmen Rodríguez Becerra, Juan Bosco Rodríguez, José Castro Payán, Miriam Rodríguez Becerra de Castro, Martina Vargas Quevedo, José Torres Ornelas y María del Carmen Rodríguez Becerra viuda de Ruiz, presentó pruebas y alegatos en defensas de los intereses de sus agremiados, argumentando la inafectabilidad de sus respectivas propiedades, en virtud de que éstas, no rebasan los límites establecidos para la pequeña propiedad y se encuentran debidamente explotadas, anexando como pruebas documentales diversas constancias expedidas por la Asociación Ganadera Local de

Rosario, Sinaloa, y por la Presidencia Municipal del mismo municipio y estado; copias de recibos de pagos de impuesto predial; copias de escrituras públicas con las que ampara la propiedad de sus predios; planos de los mismos y copia del título del fierro de herrar en algunos casos.

Asimismo, por escrito de diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y cinco, la Asociación Ganadera Local de Rosario, Sinaloa, informa que sus asociados José Torres Vargas, José Torres Ornelas, Martina Vargas Quevedo, Hilario López González, José María González Pimienta y Roberto Rodríguez Luna, dedican sus respectivos predios a la explotación ganadera; que el coeficiente de agostadero para la región es de 2-80-00 (dos hectáreas, ochenta áreas) por cabeza de ganado mayor, según constancia proporcionada por COTECOCA número 009/84, del Estado de Sinaloa y hacen constar que Manuel López Gaytán, Fortino López y Bruno López Padilla, no se encuentran inscritos en esa Asociación.

DECIMO SEXTO.- El veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y seis, el pleno del Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó nuevo acuerdo, mediante el cual se solicitó a la Delegación Agraria en el Estado, trabajos técnicos e informativos complementarios; siendo comisionado para el efecto, el ingeniero Marco Antonio López Reyes, quien rindió su informe el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, el cual en su parte medular manifiesta que se dirigió al poblado gestor y que en presencia de las autoridades ejidales, procedió a efectuar el levantamiento topográfico de los terrenos afectados por el mandamiento gubernamental, pertenecientes a José Torres Ornelas, José Torres Vargas y Martina Vargas Quevedo, señalando que no obstante que dichas personas no se presentaron a señalar sus linderos, pudo constatar que existe una sobreposición de 200-00-00 (doscientas hectáreas), con el ejido "El Duranguito", del mismo municipio y estado, señalando además que no encontró ninguna brecha, mojonera, ni cercos que delimiten a cada uno de los lotes, formando una sola unidad topográfica con superficie analítica de 1,041-17-32 (mil cuarenta y una hectáreas, diecisiete áreas, treinta y dos centiáreas). Aclara el comisionado que la reducción de la superficie del predio que originalmente contaba con 1,758-00-00 (mil setecientos cincuenta y ocho hectáreas), se debe a que no se encuentra incluido el predio que fue propiedad de Bruno López Padilla, denominado fracción del predio "Ponce" y que en la actualidad se encuentra a nombre de Roberto Rodríguez Luna y Dora Laura López Sánchez. Ahora bien, respecto a la superficie localizada por el comisionado, informa que conforme a la constancia emitida por el Registro Público de la Propiedad, mediante oficio número 072/977 de seis de julio de mil novecientos setenta y siete, José Torres Vargas, José Torres Ornelas y Martina Vargas Quevedo, son propietarios de fincas rústicas con superficies de 404-80-99 (cuatrocientas cuatro hectáreas, ochenta áreas, noventa y nueve centiáreas), 420-44-04 (cuatrocientas veinte hectáreas, cuarenta y cuatro áreas, cuatro centiáreas) y 416-37-33 (cuatrocientas dieciséis hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y tres centiáreas), respectivamente, de cuya superficie total reportada, debe considerarse las 200-00-00 (doscientas hectáreas) que pertenecen al ejido "El Duranguito", aclarando con esto la reducción mencionada.

Posteriormente, por oficio de cinco de diciembre de ese mismo año, el Cuerpo Consultivo Agrario, ordenó se complementara dicho informe, toda vez que:

"...El comisionado Ing. Marco Antonio López Reyes, en su informe de fecha 29 de marzo de 1988, indica que de una clasificación general de los terrenos investigados la mayor parte son de agostadero cerril con porciones susceptibles al temporal, sin embargo en el acta levantada con fecha 25 de abril de 1987, indica que los terrenos son de temporal y agostadero cerril sin precisar en qué cantidad de hectáreas corresponden a tales cantidades de los predios a que se sujetó la investigación. A mayor abundamiento existe una marcada contradicción en la clasificación de los terrenos, en virtud de que el informe de fecha 24 de agosto de 1984, rendido por el Ing. José María Espinoza Álvarez, en él determina que la superficie, la mayor parte de ella es de agostadero susceptible de cultivo al temporal..."

Asimismo ordena se describa el tipo de explotación a que se destinan los terrenos y la superficie que poseen los solicitantes. En cumplimiento a lo cual, la Delegación Agraria en el Estado, mediante oficio VI/60435, de siete de mayo de mil novecientos noventa, destacó al ingeniero Alfonso Moreno Pérez, quien rindió su informe el veintiocho de noviembre de ese año, del que se desprende:

"...TRABAJOS DE CAMPO:- Estos consistieron en llevar a cabo un recorrido por los terrenos solicitados para la Dotación del Poblado que nos ocupa, habiendo notificado previamente a los pequeños Propietarios por medio de el Representante de la Pequeña Propiedad en el Municipio (sic) del C. ROBERTO RODRIGUEZ ONTIVEROS, se procedió a llevar a cabo los trabajos encomendados. Llevando a cabo una inspección ocular en todos y cada uno de los terrenos, levantando en cada caso la respectiva Acta de Inspección Ocular que son como a continuación se describen.- JORGE TORRES VARGAS:- Esta persona se encuentra en posesión

de una superficie aproximada de 20-00-00 Has. que queda comprendida entre la carretera internacional y el Río Baluarte, el resto del Terreno lo tiene en posesión los solicitantes, constituyen a una sola unidad topográfica los terrenos, con los de José Torres Ornelas y Martina Vargas de Torres y en su mayoría son de Agostadero Cerril con un 20% susceptible de cultivo al temporal la posesión de los solicitantes son como agostadero y lo susceptible de cultivo se compone de Rosas o Cuamiles que siembran de maíz.- ROBERTO RODRIGUEZ LUNA:- Este terreno con superficie de 410-00-00 Has., se encuentra en posesión de el Propietario quien manifiesta haberle comprado a DORA LAURA LOPEZ SANCHEZ, dicho terreno se encuentra delimitado por una cerca de alambre de púas, éste es de Agostadero Cerril, se encuentra un rancho y dos repesos para Agua para el Ganado, en el momento de la inspección no se encuentra Ganado ya que su Propietario manifiesta que en este tiempo el Ganado se encuentra en otros potreros, por lo que presenta constancia de la Asociación Ganadera de ser propietario de 500 Cabezas de Ganado Bovino.- HILARIO LOPEZ:- Este Terreno comprende una superficie aproximada de 400-00-00 Has., de las cuales 200-00-00 Has., se encuentran en posesión de los ejidatarios y el resto del propietario del terreno, es de agostadero cerril de mala calidad el cual se aprovecha con el posleo (sic) de Ganado Bovino.- DORA LAURA LOPEZ SANCHEZ:- Este terreno comprende una superficie de 210-00-00 Has. de agostadero cerril con porciones laborables de un 15 a 20% susceptible de cultivo al temporal en posesión de los solicitantes.- MANUEL LOPEZ GAYTAN: -Este terreno comprende una superficie de 100-00-00 Has., con aproximadamente un 50% susceptible de cultivos al temporal está delimitado por cerca de Alambre de púas en malas condiciones se encuentra en posesión del Propietario quienes le compraron a BRUNO LOPEZ.- FORTINO LOPEZ SANCHEZ:- Este terreno tiene una superficie de 100-00-00 Has., con aproximadamente un 50% susceptible de cultivo al temporal el resto de agostadero cerril, está delimitado por cerca de alambre de púas, en este terreno se encuentra un rancho con cría de ganado donde habitan los propietarios, el terreno se encuentra en posesión de éstos.- Se solicitaron datos del Registro Público de la Propiedad los cuales fueron enviados con fecha 8 de noviembre de 1990. Los cuales se anexan al presente informe...".

Anexando a su informe entre otros documentos constancia del Registro Público de la Propiedad de nueve de noviembre de ese año, notificaciones a los propietarios de los predios investigados de treinta de julio del referido año y acta de inspección ocular del tres de agosto del año de que se trata.

DECIMO SEPTIMO.- Por oficio 2236, de veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, la Central Campesina Independiente, asesorando al núcleo gestor, quienes firman dicho documento, compareció ante la Delegación Agraria de la entidad, solicitando se practique inspección ocular y nuevos trabajos censales en el poblado de referencia, los cuales deberán determinar los capacitados que se encuentran actualmente y quienes se encuentran trabajando quieta y pacíficamente los terrenos dotados en provisional. Para lo cual se destacó al ingeniero José Rosario Beltrán, de cuya acta de inspección ocular y diligencias censales de veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y ocho, se conoce:

"...La posesión provisional se otorgó el 25 de noviembre de 1969, no se practicó el deslinde de los terrenos concedidos.- En la actualidad dicho expediente se encuentra en segunda instancia para su tramitación definitiva.- Hecho lo anterior se procedió a realizar el recorrido en cada una de las parcelas pertenecientes a los campesinos que aparecen enumerados en el censo básico y en la actualización de éste, asimismo de aquellos campesinos que no aparecen enunciados en ninguna relación o censo que se anexa a la presente, al respecto se considera importante señalar que los primeros campesinos adquirieron sus respectivas unidades parcelarias a partir de la ejecución del Mandamiento que se menciona en antecedentes y con relación a los segundos, éstos según manifestaron los acompañantes, adquirieron sus superficies sin acuerdo de asamblea, únicamente abriendo pequeños pedazos en los cerros. Cabe señalar que las superficies que a continuación se relacionarán corresponden a pequeñas porciones llamadas cuamiles, toda vez que la mayoría de terreno dotado en provisional es de agostadero cerril susceptible de cultivo al temporal, por lo antes expuesto, a continuación se detallan los campesinos que aparecen relacionados en los censos citados en los párrafos anteriores.- ...".

De dichas constancias concluye con la relación del censo único, del que se conoce la existencia de sesenta y tres campesinos capacitados.

DECIMO OCTAVO.- En respuesta a las notificaciones realizadas a los propietarios de los predios investigados, mediante cédulas notificadorias de treinta de julio de mil novecientos noventa, Roberto Rodríguez Luna, por escrito de doce de enero de mil novecientos noventa y uno, compareció a ofrecer pruebas y alegatos consistentes en copias de la escritura pública de su propiedad con superficie de 440-14-36 (cuatrocientas cuarenta hectáreas, catorce áreas, treinta y seis centiáreas); plano del predio; constancias de explotación expedida por la Presidencia Municipal del Rosario, Sinaloa; constancia expedida por la Asociación Ganadera Local de Rosario, Sinaloa, en la que se hace constar que el oferente es miembro activo de esa Asociación y que posee quinientas cabezas de ganado bovino, y copia del título del fierro para

herrar semovientes; alegando que su predio de conformidad con los artículos 249, 250, 251 y 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se trata de una auténtica pequeña propiedad inafectable.

DECIMO NOVENO.- En sesión plenaria de siete de julio de mil novecientos noventa y tres, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó dictamen positivo, en el que propone la afectación de 1,288-62-15 (mil doscientas ochenta y ocho hectáreas, sesenta y dos áreas, quince centiáreas) de agostadero de buena calidad, para beneficiar al poblado promovente de la acción de que se trata.

VIGESIMO.- Corre agregado al expediente en estudio las constancias siguientes:

a).- Escrito presentado el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por Hilario López González, propietario del predio denominado "Rincón de Campanillas", ante la Coordinación Agraria en la entidad federativa, por medio del cual presenta como pruebas: copia certificada de su título de propiedad; constancia de posesión y explotación, expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa; constancias expedidas por la Asociación Ganadera Local de Rosario, Sinaloa, de tres y cinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco; copia certificada expedida por la Tesorería General del Estado de Sinaloa y guías de tránsito y facturas de venta de ganado; alegando que su predio de conformidad con los artículos 249, 250, 251 y 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se trata de una pequeña propiedad agrícola-ganadera en explotación.

b).- Escrito de pruebas y alegatos presentado por Irma Torres de Solís y José Torres Vargas, por su propio derecho y este último, además en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Martina Torres Vargas, el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, como propietarios de dos fracciones de terreno, cada una de 586-26-00 (quinientas ochenta y seis hectáreas, veintiséis áreas), ante el Cuerpo Consultivo Agrario; ofreciendo como pruebas: escritura pública de la modificación de división de cosa común, relativa a las fracciones señaladas; copias certificadas de las constancias del juicio sucesorio testamentario a bienes de Martina Vargas Quevedo; escritura pública de la donación que le correspondió a favor de Irma Torres de Solís, respecto de la finca señalada; estudios de coeficiente de agostadero, de las tres fracciones con las que actualmente cuenta el predio que nos ocupa; constancia de posesión y explotación, expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, sobre la finca rústica de 404-80-99 (cuatrocientas cuatro hectáreas, ochenta áreas, noventa y nueve centiáreas), propiedad de José Torres Vargas y constancia expedida por el Presidente de la Comisión Ganadera Local de Rosario, Sinaloa, a favor de José Torres Vargas.

c).- Acta administrativa de extravío de documentos, levantada por el Cuerpo Consultivo Agrario, el treinta de enero de mil novecientos noventa y seis, por la que hace constar el extravío de los informes de trabajos técnicos e informativos de veintisiete de abril de mil novecientos setenta y tres, y quince de junio de mil novecientos setenta y cinco, rendidos por los ingenieros Jaime Félix Carvajal y Arnulfo Cázares Villalobos, respectivamente.

VIGESIMO PRIMERO.- Por auto de primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, se tuvo por radicado el presente expediente en este Tribunal Superior Agrario, para su resolución, registrándose bajo el número 294/96; habiendo notificado a los interesados y comunicado a la Procuraduría Agraria.

VIGESIMO SEGUNDO.- Por sentencia dictada el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal Superior Agrario, resolvió lo siguiente:

"...PRIMERO.- Es procedente la dotación de tierras, promovida por campesinos del poblado denominado "Chilillos", Municipio de Rosario, del Estado de Sinaloa.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota al poblado de referencia con una superficie total de 1,163-62-15 (mil ciento sesenta y tres hectáreas, sesenta y dos áreas, quince centiáreas) de agostadero susceptible de cultivo al temporal, ubicados en el Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa, misma que se tomará de la siguiente manera: 841-62-36 (ochocientas cuarenta y una hectáreas, sesenta y dos áreas, treinta y seis centiáreas), de las fracciones del predio "Ponce", propiedad para efectos agrarios de José Torres Ornelas, José Torres Vargas y Martina Vargas Quevedo; 128-48-29 (ciento veintiocho hectáreas, cuarenta y ocho áreas, veintinueve centiáreas), de la fracción del predio "El Tamarindo", propiedad para efectos agrarios de Bruno López S.; y 193-51-50 (ciento noventa y tres hectáreas, cincuenta y un áreas, cincuenta centiáreas), del predio "Campanillas", propiedad para efectos agrarios de Hilario López; afectables con fundamento en los artículos 209, 249 y 250 interpretados a contrario sensu los dos últimos, de la Ley Federal de Reforma Agraria, al exceder el límite señalado para la pequeña propiedad, de conformidad a los razonamientos señalados en los considerandos quinto y sexto que anteceden; para satisfacer las necesidades agrarias de los

sesenta y tres campesinos capacitados que quedaron descritos en el considerando segundo de esta sentencia. La superficie que se concede debe ser localizada conforme al plano proyecto que deberá elaborarse y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria, y podrá constituir el área de asentamientos humanos, la parcela escolar, la unidad agrícola e industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud.

TERCERO.- Se modifica el mandamiento del Gobernador del Estado de Sinaloa, de veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial de dicha Entidad Federativa, el veintinueve del mismo mes y año, en lo que se refiere a la superficie considerada como afectable.

CUARTO.- Publíquese: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribábase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva. Asimismo, inscribábase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo establecido en esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Sinaloa, y a la Procuraduría Agraria; ejecútase y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido...”.

VIGESIMO TERCERO.- Inconformes con la sentencia anterior, Irma Torres de Solís y José Torres Vargas, por su propio derecho y este último, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de la señora Martina Torres Vargas, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, el que quedó radicado bajo el número D.A. 1055/98, en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que dictó sentencia el veinticinco de enero de dos mil en los siguientes términos:

“... PRIMERO.- SE SOBRESEE, en el presente juicio de amparo, por los actos que se les reclaman a las autoridades precisadas en el considerando tercero y cuarto de la presente resolución.

SEGUNDO.- La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a IRMA TORRES DE SOLIS y COAGRAVIADOS, contra la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictada por el Tribunal Superior Agrario, en el juicio agrario número 294/96, para el efecto que se precisa en el último considerando de esta ejecutoria.

NOTIFIQUESE; Personalmente al tercero perjudicado y, con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos del expediente del juicio agrario y los legajos que remitió al Tribunal responsable y, en su oportunidad archívese este expediente...”.

Las consideraciones que sirvieron de sustento, son del tenor siguiente:

SEXTO.- Los conceptos de violación que se hacen valer, son parcialmente fundados de conformidad, con las consideraciones siguientes:

En efecto el primer concepto de violación que hacen valer los quejosos, aducen que la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía de audiencia, porque no se les hizo saber los hechos que se imputaban para que estuvieran en posibilidad de defenderse, ofreciendo pruebas y formulando los alegatos tendientes a desvirtuar cualquier imputación y así preservar sus derechos, esto es, que se les debió haber notificado a los propietarios en los trabajos técnicos de la probable afectación, puesto que el comisionado no convalida el hecho de que los anteriores propietarios hubieran solicitado la inspección ocular de su predio para acreditar la calidad real de la misma y toda vez que en ningún momento se señaló la reposición de estos trabajos y así se dejaron, por lo que el actual Tribunal Superior Agrario a pesar de las deficiencias da valor probatorio en su perjuicio.

Al respecto debe decirse que no les asiste la razón, ya que de los autos del juicio agrario se desprende que sí fueron llamados a juicio, tan es así que tuvieron la oportunidad de ofrecer pruebas, y de participar en los trabajos técnicos ordenados por el cuerpo consultivo agrario, con independencia de que pudieran objetar durante el procedimiento las irregularidades que hubieran existido en éstos.

Lo anterior es así, si tomamos en consideración que obran en los autos del expediente agrario diversas pruebas que fueron ofrecidas por los ahora quejosos y con independencia del resultado de las mismas, algunas de ellas fueron tomadas en consideración por el Tribunal Superior Agrario en la resolución reclamada, como se advierte en los considerandos cuarto y quinto de la propia resolución. En estas condiciones, debe decirse que en ese aspecto no les asiste la razón a los quejosos.

En cambio, el cuarto concepto de violación resulta fundado y suficiente para conceder la protección solicitada, ya que tal y como lo aducen los quejosos, en la resolución reclamada, la autoridad responsable no valoró algunas pruebas ofrecidas por éstos consistentes en los estudios de coeficientes de agostadero de las tres fracciones con las que cuenta el predio denominado "PONCE".

En efecto, de las constancias que obran en el expediente agrario se advierte que los quejosos ofrecieron entre otras pruebas el estudio de los coeficientes de agostadero y del aprovechamiento actual del predio rústico de su propiedad, tal y como se advierte de los legajos X, XI y XII del expediente agrario, en los que obran los dictámenes emitidos por la Comisión Técnica Consultiva de Coeficientes de Agostadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Las pruebas de referencia no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal Superior Agrario en la resolución reclamada, puesto que en ninguna parte de las consideraciones se hace la valoración de los dictámenes de referencia, con lo que pretende demostrar la calidad de la tierra que poseen y que de ello depende el número de hectáreas que deben conformarse las pequeñas propiedades sujetas a afectación; por lo que como consecuencia de ello, se violó en perjuicio de los quejosos las garantías de legalidad y seguridad pública jurídica que protegen los artículos 14 y 16 Constitucionales.

En estas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación a estudio sin necesidad de análisis de los restantes, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal a los quejosos, para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emita otra en la que valore la totalidad de las pruebas aportadas por los pequeños propietarios; y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley Agraria.

Es aplicable a este particular la tesis de jurisprudencia número tres, consultable en la página ocho del informe de labores mil novecientos ochenta y dos, parte II, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIOS DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja...".

VIGESIMO CUARTO.- En cumplimiento de la ejecutoria de mérito, este Tribunal Superior Agrario, dictó acuerdo el veintinueve de febrero de dos mil, resolviendo lo siguiente:

"...PRIMERO.- Se deja parcialmente insubsistente la sentencia definitiva de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por este Tribunal Superior Agrario en el expediente del juicio agrario 294/96, que corresponde al expediente administrativo agrario mil novecientos setenta y nueve, relativos a la dotación de tierras al poblado "CHILILLOS", Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa, únicamente por lo que se refiere a la superficie que defiende cada uno de los quejosos.

SEGUNDO.- Túrnese el expediente del juicio agrario 294/96, con el expediente administrativo agrario respectivo al Magistrado Ponente, para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, formule el proyecto de sentencia correspondiente, y lo someta a la aprobación del pleno de este Tribunal Superior...".

VIGESIMO QUINTO.- Este Tribunal Superior Agrario, por sentencia dictada el cuatro de abril de dos mil, en cumplimiento de la ejecutoria número D.A.1055/98, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veinticinco de enero de dos mil, en estricto cumplimiento de la misma, resolvió lo siguiente:

"...PRIMERO.- Es afectable la superficie correspondiente al predio denominado "Ponce", del Municipio de Rosario, en el Estado de Sinaloa, propiedad de José Torres Vargas e Irma Torres Solís, por las razones y motivos apuntados en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de dicha afectación es de dotarse y se dota al poblado de referencia la superficie que ampara el predio denominado "Ponce" que asciende a un total de 841-62-36 (ochocientas cuarenta y una hectáreas, sesenta y dos áreas, treinta y seis centiáreas), predio integrado por tres fracciones de terreno, propiedad para efectos agrarios de José Torres Ornelas, José Torres Vargas y Martina Vargas Quevedo; afectable con fundamento en los artículos 249, 250 y 251 interpretados a contrario sensu los dos últimos, de la Ley Federal de Reforma Agraria, al haberse encontrado inexplorada, de conformidad a los razonamientos señalados en el considerando cuarto que antecede; para satisfacer las necesidades agrarias del poblado "CHILILLOS", Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa. La superficie que se concede debe ser localizada conforme al plano proyecto que deberá elaborarse y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá

de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria, y podrá constituir el área de asentamientos humanos, la parcela escolar, la unidad agrícola e industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud.

TERCERO.- Publíquese: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa; los puntos resolutiveos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva. Asimismo, inscribáse en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo establecido en esta sentencia.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Sinaloa, y a la Procuraduría Agraria; y con copia certificada de esta sentencia al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito, ejecútense; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido...”.

VIGESIMO SEXTO.- Inconformes con la sentencia anterior, Irma Torres de Solís, José Torres Vargas y la sucesión testamentaria a bienes de Martina Torres Vargas, demandaron el amparo y protección de la justicia federal, el que quedó radicado bajo el número D.A. 1985/2000, en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien dictó sentencia el trece de mayo de dos mil dos, en los siguientes términos:

“...UNICO.- La justicia de la unión ampara y protege a Irma Torres de Solís, José Torres Vargas y a la sucesión testamentaria a bienes de Martina Vargas de Torres o Martina Vargas Quevedo, contra la sentencia de cuatro de abril de dos mil, dictada por el Tribunal Superior Agrario, en el juicio agrario número 294/96, su inscripción a cargo del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, y los actos de ejecución, a cargo del Subsecretario General de Acuerdos de Integración y Ejecución de Resoluciones del Tribunal Superior Agrario, del Director de Ejecuciones dependiente de esta última y del actuario adscrito al Tribunal Superior Agrario, para el efecto que se precisa en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese personalmente a la tercero perjudicado, con testimonio de la presente resolución, devuélvase los autos del expediente agrario y los legajos que remitió al Tribunal de su origen y en su oportunidad archívese el presente expediente...”.

Las consideraciones que sirvieron de sustento para conceder el amparo, son del tenor literal siguiente:

“...OCTAVO.- Los conceptos de violación que se hacen valer, son parcialmente fundados, en atención a las consideraciones siguientes:..... En cambio, es esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección solicitada, lo alegado por los quejosos en el cuarto concepto de violación que hace valer, respecto a que en la resolución reclamada no se hace una debida valoración de los estudios técnicos informativos relativos a la inexplotación de los predios por más de dos años, toda vez que según los trabajos técnicos informativos elaborados entre otros por José María Espinoza Alvarez, quien manifiesta que encontró porciones cubiertas al cultivo de maíz y cacahuete, explotadas por los ejidatarios; en contradicción con otros informes técnicos administrativos, en los que se manifestó que los terrenos y superficie que poseen los solicitantes, determinó que el predio de José Torres Vargas era en su mayoría de agostadero cerril con un 20% susceptible de cultivo de temporal; asimismo que la inexplotación de los predios por más de dos años consecutivos, no son imputables a ellos, sino a la posesión que tienen los solicitantes de la ampliación del ejido.

Les asiste la razón a los quejosos, toda vez que la resolución reclamada se apoyó para declarar la afectación de los predios, en lo dispuesto por los artículos 250 y 251, de la Ley de Reforma Agraria, transcritos con anterioridad, básicamente en relación al término que deben permanecer sin explotación los predios para ser susceptibles de afectación; supuestos que contrariamente a lo considerado por la responsable, no se encuentran acreditados.

Lo anterior es así, porque de las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada, se desprende que el Tribunal Superior Agrario, no analizó debidamente todas las pruebas que obran en autos en forma adminiculadas (sic) con todos los trabajos técnicos, pues de haberlo hecho, como lo alegan los quejosos, se hubiera percatado que no se encuentra acreditada la causal de inexplotación de los predios sujetos a dotación por un periodo mayor a dos años, anterior a la posesión provisional y que si existió con posterioridad, no era imputable a ellos, sino a esa posesión provisional que se les otorgó a los aspirantes a la ampliación del ejido.

En efecto, del informe técnico rendido por el Topógrafo Ubaldo Alonso Yáñez, el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, que en copia certificada obra a fojas setenta y dos del legajo número 1, de pruebas, se advierte que informó lo siguiente:

“En cumplimiento a la comisión conferida me trasladé al poblado de referencia, procediendo a localizar dentro del radio legal de afectación al citado pueblo, las siguientes fincas rústicas en los predios que a continuación se menciona:- PREDIO “PONCE”.- Un lote de terreno propiedad del Sr. José Torres Ornelas con una superficie de 586-00-00 Hs. de monte susceptible de cultivo al temporal de las cuales 80-00-00 Hs. están abiertas al cultivo.- Un lote de terreno propiedad de José Torres Vargas, con una superficie de 586-00-00 Hs., de monte susceptible de cultivo al temporal de las cuales aproximadamente 40-00-00 Hs. están abiertas al cultivo.- un lote de terreno propiedad de la Sra. Martina Vargas Quevedo, con una superficie de 586-00-00 Hs., de las cuales 186-00-00 Hs., son de monte susceptibles de cultivo al temporal, el resto o sea 400-00-00 Hs. son de agostadero cerril de buena calidad.- Cabe aclarar que los tres lotes de terreno antes descritos se encuentran formando una sola unidad ya que no se encontraron brechas ni mojoneras que delimiten cada lote...”.

El comisionado ingeniero Antonio Valdez González, en su informe que rindió el dos de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, que obra a fojas ciento setenta y tres, del legajo número 1, de pruebas, manifiesta:

“Con fecha 25 de noviembre del año actual, se ejecutó el Mandamiento Gubernamental de fecha 20 de noviembre del mismo año, que concede Dotación Provisional de Ejido al poblado de referencia con una superficie total de 1,279-99-79 hectáreas de monte susceptible de cultivo al temporal, tomadas íntegramente de los diferentes predios, ubicados en el Municipio de Rosario, de este Estado, puestas en posesión y entregadas al poblado mencionado por conducto de su Comisariado Ejidal en la siguiente forma: del predio denominado “Ponce”: 386-00-00 Hs., propiedad de José Torres Ornelas; 386-00-00 Hs. propiedad de José Torres Vargas; y 186-00-00 Hs., propiedad de Martina Vargas Quevedo;...”.

El ingeniero Roberto González Solórzano, rindió informe el dieciocho de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, y no al ingeniero Armando E. Apodaca Soto, como erróneamente lo refiere el Tribunal Superior Agrario, que obra en el legajo IX, en el que informó que:

“...Una vez apercibido de la Comisión conferida me trasladé al poblado “CHILILLOS”, Municipio de Rosario, de esta Entidad Federativa, solicitando información de los predios afectados al Registro Público de la Pequeña Propiedad informándome en oficio No. 072/977 de fecha junio 6 de 1977, en el cual se me informa que el C. José Torres Vargas tiene una superficie de 404-80-99 has., según libro 49 inscripción 194, secc. 1ra. con fecha 19 de septiembre de 1974; Martina V. de Torres tiene registradas a su nombre 416-37-33 has., libro 49 inscripción 194, libro 49 secc. 1ra. con fecha 19 de septiembre de 1974;...”.

Asimismo, en el informe rendido por el ingeniero José María Espinoza Alvarez, de veinte de agosto de mil novecientos setenta y ocho, fojas dos del legajo número II, de pruebas, manifiesta:

“...TRABAJOS REALIZADOS: Una vez documentado ampliamente al respecto, procedí a trasladarme al poblado que nos ocupa, entrevistándome con las autoridades del ejido y darles a conocer el motivo de la comisión, a lo cual argumentaron que ellos están de acuerdo con los trabajos técnicos e informativos siempre y cuando únicamente se llevan a cabo dentro de los terrenos que les fueron dotados en Primera Instancia y que aún no los poseen ellos; sino los propietarios afectados, así también dieron a conocer que no les interesan las demás fincas rústicas del Radio legal, ya que consideran que son auténticas Pequeñas Propiedades.- Primeramente se procedió a notificar a los Pequeños Propietarios de fincas rústicas que se encuentran afectadas según Mandamiento Gubernamental de fecha 20 de noviembre de 1969, y según inspecciones practicadas se encuentran de la siguiente manera: José Torres Vargas.- Propietario de 404-80-94 Has., de las cuales se encontraron aproximadamente 15-00-00 Has., sembradas de mango y varias fracciones chicas sembradas de maíz, dichas fracciones se encuentran distantes unas de otras acumulando aproximadamente unas 40-00-00 Has., entre todas, estas fracciones constituyen terrenos bajos, temporal aluvión de segunda calidad y el resto del terreno son lomeríos cerriles de agostadero, no encontrándose ninguna cabeza de ganado en su interior; la fauna que predomina en la región es: vara blanca, ocote, mezquitillo, palo blanco, zacate, alambre de púas y postería en toda su extensión.- José Torres Ornelas.- con superficie de 404-80-94 Has., de agostadero cerril, con pequeñas fracciones abiertas de cultivo de temporal, en lo que respecta a sus partes bajas, dichas fracciones se encuentran sembradas de maíz, y cacahuate, explotándolas ejidatarios del ejido de “CHILILLOS”, la fauna que predomina en esta región es la vara blanca, ocotillo, mezquitillo, zacate liebrero, etc., en lo que respecta a la calidad de las tierras “fracciones”

abiertas al cultivo son de aluvi3n prenoso, consideradas de segunda calidad y el resto del terreno de monte, la mayor parte agostadero cerril de buena calidad; no se encontr3 ninguna cabeza de ganado en toda su extensi3n, dicho lote se encuentra cercada en toda su extensi3n.- Martina Vargas de Torres.- Con superficie de 416-37-33 Has., de agostadero y monte cerril, encontr3ndose peque1as fracciones de terreno abiertas al cultivo de temporal con siembras de ma1z y cacahuete, sembradas por ejidatarios del ejido "CHILILLOS". El resto del terreno se constituye de zacate liebrero, vara blanca, ocotillo mezquitillo, guasimilla, etc., dicho terreno se encuentra delimitado por medio de poster1a y alambre de p1as de cuatro hilos".

En el informe rendido por el ingeniero Marco Antonio L3pez Reyes, el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, manifest3:

"PREDIO PONCE".- Un lote propiedad del Sr. Jos3 Torres Ornelas, con superficie de 586-00-00 Has. de monte susceptible de cultivo al temporal de las cuales 80-00-00 Has., est3n abiertas al cultivo.- Un lote de terreno propiedad de Jos3 Torres Vargas, con superficie de 586-00-00 Has., de monte susceptible de cultivo al temporal de las cuales aproximadamente 40-00-00 Has. est3n abiertas al cultivo.- Un Lote de terreno propiedad de la C. Martina Vargas Quevedo con superficie de 586-00-00 Has. de las cuales 186-00-00 Has. son de monte susceptible de cultivo al temporal, el resto de agostadero cerril de buena calidad.- Cabe aclarar que los tres lotes de terreno antes descritos se encuentran formando una sola unidad, ya que no se encontraron brechas ni mojoneras que delimiten a cada lote.-...".

Finalmente, en el informe del ingeniero Alfonso Moreno P3rez, rendido el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa, fojas cincuenta del legajo V, de pruebas, manifest3:

"...TRABAJOS DE CAMPO.- Estos Consistieron en llevar a cabo un recorrido por los terrenos solicitados para la Dotaci3n del Poblado que nos ocupa, habiendo notificado previamente a los peque1os propietarios por medio del Representante de la Peque1a Propiedad en el Municipio (sic) del C. Roberto Rodr1guez Ontiveros, se procedi3 a llevar a cabo los trabajos encomendados. Llevando a cabo una inspecci3n Ocular en todos y cada uno de los terrenos, levantando en cada caso la respectiva Acta de Inspecci3n Ocular que son como a continuaci3n se describen.- Jos3 Torres Vargas: Esta persona se encuentra en posesi3n de una superficie aproximada de 20-00-00 Has., que queda comprendido entre la carretera internacional y el R1o Baluarte, el resto del terreno lo tienen en posesi3n los solicitantes constituyen a una sola unidad Topogr3fica los Terrenos, con los de Jos3 Torres Ornelas y Martina Vargas de Torres y en su mayor1a son de Agostadero Cerril con un 20% susceptible (sic) de cultivo al temporal las posesiones de los solicitantes son como agostadero y lo susceptible de cultivo se compone de Rosas o Cuamiles que siembran de ma1z...".

Adem3s obra a fojas ciento setenta y cinco del legajo I, de pruebas, el acta de posesi3n de veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, de los predios sujetos a dotaci3n.

Ahora bien, de las constancias anteriormente precisadas se desprende que de los trabajos t3cnicos informativos llevados a cabo en el procedimiento agrario del que deriva la sentencia reclamada, no se encuentra acreditado que los predios que defienden los quejosos, objeto de la dotaci3n, hayan estado sin explotaci3n por un lapso de tiempo mayor a dos a1os anteriores a la fecha en que se otorg3 la posesi3n provisional de los mismos al poblado ahora tercero perjudicado, para que resultaran afectables en t3rminos de lo dispuesto en el art1culo 251, de la Ley Federal de Reforma Agraria, en consecuencia, al no considerarlo as1 el Tribunal Superior Agrario, responsable, infringi3 en perjuicio de los quejosos las garant1as de legalidad y seguridad jur1dica consagradas en los art1culos 14 y 16 Constitucionales; por lo que procede conceder el amparo y la protecci3n de la Justicia Federal, para que el Tribunal Superior Agrario, dejando insubsistente la resoluci3n reclamada, emita otra sin contravenir los lineamientos establecidos en esta ejecutoria.

Al resultar fundado el concepto de violaci3n al estudio, resulta innecesario el estudio de los restantes, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia n1mero tres, consultable en la p3gina ocho del informe de labores de mil novecientos ochenta y dos, parte II, que a la letra dice:

CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIOS DE LOS.- Si al examinar los conceptos de violaci3n invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de 3stos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garant1as la protecci3n y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los dem3s motivos de queja...".

VIGESIMO SEPTIMO.- En cumplimiento de la ejecutoria de m3rito, este Tribunal Superior Agrario, dict3 acuerdo el dieciocho de junio de dos mil dos, declarando insubsistente la sentencia dictada por 3l, el cuatro de abril de dos mil dos, en el expediente del juicio agrario 294/96, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- La presente resolución se dicta en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el trece de mayo de dos mil dos, en el juicio de amparo directo número D.A. 1985/2000, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Irma Torres de Solís, José Torres Vargas y a la sucesión testamentaria a bienes de la señora Martina Vargas de Torres o Martina Vargas Quevedo, contra el acto reclamado al Tribunal Superior Agrario, consistente en la resolución definitiva dictada el cuatro de abril de dos mil, que dotó de tierras al poblado "Chilillos", Municipio de Rosario, en el Estado de Sinaloa; declarando afectable para los efectos anteriores, la superficie correspondiente al predio denominado "Ponce", siendo el efecto de la concesión de la Protección Constitucional, el que el Tribunal Superior Agrario, deje insubsistente la resolución reclamada, y: "...emita otra sin contravenir los lineamientos establecidos en esta ejecutoria..."

TERCERO.- Ahora bien, toda vez que en el presente asunto el amparo le fue concedido única y exclusivamente a Irma Torres de Solís, José Torres Vargas y la sucesión testamentaria a bienes de Martina Vargas de Torres o Martina Vargas Quevedo, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, que establece:

"...Las sentencias que se pronuncia en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare..."

De una sana interpretación al precepto precedentemente mencionado, se colige que en el presente caso, únicamente debemos ocuparnos del análisis y estudio respecto de la superficie que conforma el predio denominado "Ponce", que defienden los quejosos en el amparo, para determinar si el mismo resulta ser o no, afectable; de tal suerte, que la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, queda subsistente respecto de lo que no fue materia de estudio constitucional.

CUARTO.- Con el objeto de no contravenir los lineamientos establecidos en la ejecutoria concedida en el amparo D.A. 1985/2000, y dar un estricto cumplimiento a la misma, se estima conveniente recordar los mismos:

"...Ahora bien, de las constancias anteriormente precisadas se desprende que de los trabajos técnicos informativos llevados a cabo en el procedimiento agrario del que deriva la sentencia reclamada, no se encuentra acreditado que los predios que defienden los quejosos, objeto de la dotación, hayan estado sin explotación por un lapso de tiempo mayor a dos años anteriores a la fecha en que se otorgó la posesión provisional de los mismos al poblado ahora tercero perjudicado, para que resultaran afectables en términos de lo dispuesto en el artículo 251, de la Ley Federal de Reforma Agraria, en consecuencia, al no considerarlo, así el Tribunal Superior Agrario, responsable, infringió en perjuicio de los quejosos las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para que el Tribunal Superior Agrario, dejando insubsistente la resolución reclamada, emita otra sin contravenir los lineamientos establecidos en esta ejecutoria..."

Por lo anteriormente expuesto, y del análisis y estudio de los informes de los trabajos técnicos e informativos rendidos el diecinueve de septiembre y dos de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuatro de febrero de mil novecientos setenta y uno, dieciocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete, veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, veintinueve de marzo y veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y ocho y veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa, por Ubaldo Alonso Yáñez, Antonio Valdez González, Roberto Ceballos Famaña, Roberto González Solórzano, José María Espinoza Alvarez, Marco Antonio López Reyes, José Rosario Beltrán y Alfonso Moreno Pérez, respectivamente, los cuales fueron señalados en la parte de resultandos de esta resolución y que en obvio de repeticiones se tienen por transcritos en este apartado, mismos que hacen prueba plena por ser expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria; se conoce por lo que hace al predio que defienden los quejosos, conocido con el nombre de "Ponce", lo siguiente:

El predio en cuestión, se encuentra dividido en tres lotes de terreno, cada uno de ellos posee una superficie de 586-00-00 (quinientas ochenta y seis hectáreas) de agostadero susceptible de cultivo al temporal, encontrándose en el predio propiedad de José Torres Vargas, 15-00-00 (quince hectáreas) aproximadamente, sembradas de mango y otras varias fracciones sembradas de maíz, encontrándose distantes estas fracciones unas de otras, acumulando entre todas aproximadamente unas 40-00-00 (cuarenta hectáreas); observándose que el resto del terreno son lomeríos cerriles de agostadero; por lo que hace al predio propiedad de José Torres Ornelas, se sabe que el mismo tiene pequeñas fracciones abiertas al cultivo de temporal, en donde se encuentran siembras de maíz y cacahuete, y el resto del terreno es de monte, en su mayor parte, agostadero cerril; en lo que toca al tercero de los lotes en que se encuentra dividido el predio "Ponce", el mismo es propiedad de Martina Vargas de Torres, encontrándose con pequeñas fracciones de terreno abiertas al cultivo de temporal con siembras de maíz y cacahuete, y el resto del terreno, es de agostadero cerril.

Como puede apreciarse también, en los informes de los mencionados trabajos técnicos, se indica que estos lotes se encontraron formando una sola unidad topográfica con superficie total analítica de 1,041-62-36 (mil cuarenta y una hectáreas, sesenta y dos áreas, treinta y seis centiáreas) de agostadero susceptible de cultivo al temporal; de las cuales durante la substanciación del procedimiento, se constató que 200-00-00 (doscientas hectáreas), pertenecen al ejido "Duranguito", mismo municipio y estado; sin embargo, con la documental aportada por los quejosos consistente en la escritura pública que contiene convenio de división de cosa común, acreditan que el predio denominado "Ponce", efectivamente se encuentra dividido en tres lotes de terreno, a los cuales originalmente les había correspondido una superficie de 586-26-00 (quinientas ochenta y seis hectáreas, veintiséis áreas), pero conforme a la realización de dicho convenio de división, se procedió a la medición de cada uno de los lotes, resultando una superficie menor para cada uno de ellos, correspondiéndole al señor José Torres Vargas una superficie de 404-80-99 (cuatrocientas cuatro hectáreas, ochenta áreas, noventa y nueve centiáreas), a José Torres Ornelas 420-44-04 (cuatrocientas veinte hectáreas, cuarenta y cuatro áreas, cuatro centiáreas) y a Martina Vargas de Torres 416-37-33 (cuatrocientas dieciséis hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y tres centiáreas); trabajos técnicos informativos, que no benefician los intereses del núcleo de población solicitante de tierras, ya que como lo señala la propia ejecutoria que se cumplimenta, de los mismos no se desprende la inexploración por más de dos años, de los predios que defienden los quejosos, para que éstos puedan resultar afectables conforme al artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria; a mayor abundamiento, en autos obra constancia expedida el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, mediante la cual la asociación ganadera local del Rosario, informa que José Torres Vargas es socio activo de dicha asociación y que se encuentra registrado con el número de título ganadero RO-814, explotando con actividad ganadera su predio.

Asimismo, corren agregados al expediente que nos ocupa, los estudios de coeficiente de agostadero y de aprovechamiento de los predios que componen en su totalidad el terreno denominado "Ponce", emitidos por la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero, dependiente de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, durante el mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, los que hacen prueba plena en términos de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria, en relación con el 130, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria, con los que se conoce y se ratifica que efectivamente el predio que defienden los quejosos se encuentra dividido en tres lotes de terreno, que cada uno de ellos cuenta con diferentes superficies, coincidiendo junto con los trabajos técnicos e informativos señalados en párrafos anteriores, que en algunas pequeñas áreas aisladas, se cultiva maíz y sorgo, así como mango, con bajos rendimientos debido a que existe erosión y deterioro del agostadero, por lo que se considera en dichos estudios que es urgente reforestar y revegetar estas áreas para evitar la pérdida del suelo.

También establecen los mencionados estudios, que el aprovechamiento del predio es para producir bovinos de raza cebú y sus cruza con pardo suizo; las crías hembras se destinan a repoblar los vientres, por lo que se tiene un propósito definido de crecimiento del hato ganadero, los machos se venden para el abasto local y regional, y la leche producida la emplean para la elaboración de quesos. Concluyendo que el coeficiente de agostadero ponderado para el predio rústico propiedad de José Torres Vargas, el mismo asciende a 3-57-00 (tres hectáreas, cincuenta y siete áreas) por unidad animal, por lo que toca al predio propiedad de Martina Vargas de Torres, el coeficiente de agostadero ponderado asciende a 4-49-00 (cuatro hectáreas, cuarenta y nueve áreas) por unidad animal y por último, en relación al predio donado por el señor José Torres Ornelas, en favor de Irma Torres Solís, el coeficiente de agostadero ponderado asciende a 3-56-00 (tres hectáreas, cincuenta y seis áreas) por unidad animal.

QUINTO.- En atención a las consideraciones y razonamientos antes vertidos, y principalmente por la información obtenida de los estudios referidos en el párrafo anterior, administrados a los diversos trabajos técnicos e informativos señalados en párrafos precedentes, resultan suficientes para que este Tribunal Superior Agrario, arribe a la conclusión de que el predio "Ponce", defendido por los quejosos, en atención a la superficie, calidad y tipo de explotación, resulta inafectable para satisfacer las necesidades agrarias del poblado "Chilillos", Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa, en términos de lo dispuesto por los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es inafectable la superficie correspondiente al predio denominado "Ponce" del Municipio de Rosario, en el Estado de Sinaloa, propiedad de José Torres Vargas e Irma Torres de Solís, por las razones y motivos apuntados en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO.- Queda subsistente la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el cuatro de abril de dos mil, respecto de lo que no fue materia de estudio constitucional.

TERCERO.- Publíquese: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa; los puntos resolutiveos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva. Asimismo, inscribáse en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo establecido en esta sentencia.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Sinaloa, y a la Procuraduría Agraria; y con copia certificada de esta sentencia al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito, ejecútese; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a seis de agosto de dos mil dos. - El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno**, **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 10/2002, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado San Pedro Lagunillas, municipio del mismo nombre, Nay.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el expediente del juicio agrario número 10/2002, relativo a la acción de segunda ampliación de ejido, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "San Pedro Lagunillas", municipio del mismo nombre, Estado de Nayarit, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por Resolución Presidencial de dos de abril de mil novecientos treinta y cuatro, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el veintitrés de octubre de mil novecientos treinta y cuatro se le concedió al poblado "San Pedro Lagunillas", por concepto de dotación de tierras una superficie de 634-90-00 (seiscientos treinta y cuatro hectáreas, noventa áreas) y por concepto de restitución una superficie total de 8,411-22-00 (ocho mil cuatrocientas once hectáreas, veintidós áreas), habiéndoseles entregado la posesión definitiva el veintidós de marzo de mil novecientos cuarenta y dos.

SEGUNDO.- Por Resolución Presidencial de veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de julio del mismo año, se le concedió al poblado "San Pedro Lagunillas", por concepto de ampliación de ejido una superficie de 3,569-80-00 (tres mil quinientas sesenta y nueve hectáreas, ochenta áreas).

TERCERO.- Por escrito de nueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, un grupo de campesinos del poblado "San Pedro Lagunillas", solicitaron al Gobernador del Estado, segunda ampliación de ejido, señalando como predios afectables los terrenos excedentes de la ex hacienda de "San Pedro Lagunillas".

CUARTO.- La Comisión Agraria Mixta el diecisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, instauró el expediente bajo el número 780.

QUINTO.- La solicitud fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, el dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve.

SEXTO.- El Gobernador del Estado, otorgó los nombramientos a José Delgado Serafín, Carlos Flores Bernal y Braulio Lepe Solórzano, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, del Comisariado Ejidal del poblado accionante.

SEPTIMO.- La Comisión Agraria Mixta realizó las notificaciones a los propietarios, arrendatarios o encargados de las fincas, localizadas dentro del radio legal de afectación, de conformidad con el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

OCTAVO.- La Comisión Agraria Mixta, mediante oficio número 58 de veintiséis de enero de mil novecientos sesenta y siete, comisionó a Félix Amezcua García para que realizara trabajos censales, diligencia que se llevó a cabo el veintitrés y veinticuatro de mayo de ese año, del que se advierte que se encontraron 300 habitantes, 59 jefes de hogar y 97 campesinos capacitados.

NOVENO.- Por oficio de veintiocho de enero de mil novecientos sesenta y nueve, la Comisión Agraria Mixta, comisionó a José Cruz Ortiz para que realizara trabajos técnicos informativos, comisionado que rindió su informe el catorce de febrero de ese año, del que se advierte que dentro del radio legal de afectación se localizaron los siguientes ejidos: "Borbollón", "Ampliación del Borbollón", "Milpillas Bajas", terrenos comunales de "San Pedro Lagunillas" y ampliación provisional del ejido de "Compostela", así como las siguientes propiedades:

Predio propiedad de Alberto Casillas, denominado "Las Trillas", con una superficie de 330-00-00 (trescientas treinta hectáreas).

Predio "La Quebrada", propiedad de Eloísa Robles Alba, con una superficie de 50-00-00 (cincuenta hectáreas).

Predio "El Tempizque", propiedad de Alfredo Robles Alba, con una superficie de 3-78-13 (tres hectáreas, setenta y ocho áreas, trece centiáreas).

Predio "La Loma", propiedad de Carlos Robles Alba, con una superficie de 4-00-00 (cuatro hectáreas).

Predio "El Platanar", propiedad de Carlos Robles Alba, con una superficie de 50-00-00 (cincuenta hectáreas).

Predio "Los Chilates", propiedad de Carlos Robles Alba, con una superficie de 50-00-00 (cincuenta hectáreas).

Predio innominado, propiedad de Ramón Rosales Delgadillo, con una superficie de 34-64-00 (treinta y cuatro hectáreas, sesenta y cuatro áreas).

Predio "La Loma", propiedad de Antonio Guzmán Martínez, con una superficie de 5,200 (cinco mil doscientos) metros cuadrados.

Predio propiedad de Leobardo Peña Velasco, con una superficie de 6-84-70 (seis hectáreas, ochenta y cuatro áreas, setenta centiáreas).

Refiriendo el comisionado que se localizó un terreno perteneciente a la ex hacienda de "Lagunillas", con una superficie de 2,980-00-00 (dos mil novecientos ochenta hectáreas), terrenos que han estado en posesión de los campesinos solicitantes desde hace más de diez años, siendo el único predio que podría afectarse para la presente acción que nos ocupa.

DECIMO.- La Comisión Agraria Mixta, el dos de junio de mil novecientos sesenta y nueve, emitió su dictamen en el sentido de declarar procedente la solicitud de ampliación de ejido, solicitada por el poblado "San Pedro Lagunillas", municipio del mismo nombre, Estado de Nayarit, concediéndoles una superficie de 2,980-00-00 (dos mil novecientos ochenta hectáreas) del predio "La Ex hacienda de Lagunillas".

UNDECIMO.- El dos de junio de mil novecientos sesenta y nueve, el Gobernador del Estado de Nayarit, emitió su mandamiento en el mismo sentido que el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el nueve de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

DUODECIMO.- La Consultoría Agraria emitió su opinión en el sentido de que la ampliación propuesta se ubicaba dentro de los terrenos reconocidos al poblado "San Pedro Lagunillas", de acuerdo con el proyecto de Resolución Presidencial aprobado el quince de abril de mil novecientos setenta, en el cual se le confirma una superficie de 19,776-00-00 (diecinueve mil setecientos setenta y seis hectáreas), motivo por el cual se sugiere se modifique el mandamiento del Gobernador Constitucional, emitido el dos de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

DECIMOTERCERO.- En este punto cabe precisar que fuera de este procedimiento mediante escrito de dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y tres, los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "San Pedro Lagunillas", interpusieron demanda de garantía en contra de actos del Presidente de la República, Secretario de la Reforma Agraria, Subsecretario de Asuntos Agrarios, Director General de Bienes Comunales y Director General de la Tenencia de la Tierra, así como del Delegado Agrario en el Estado, que hicieron consistir en la expedición de la Resolución Presidencial de seis de mayo de mil novecientos setenta, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el trece de julio del mismo año, sobre reconocimientos y titulación de bienes comunales en favor de la comunidad de "San Pedro Lagunillas", sobre una superficie de 19,776-00-00 (diecinueve mil setecientos setenta y seis hectáreas), así como los acuerdos, dictámenes u opiniones que se hayan emitido durante la tramitación del expediente que concluyó con dicha Resolución Presidencial.

Seguidos los trámites legales correspondientes el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, el Juzgado de Distrito en el Estado de Nayarit, dictó resolución concediendo la protección de la justicia federal al ejido quejoso, en razón de haber demostrado que los terrenos que fueron concedidos por diversas acciones son los mismos que en su mayoría o totalidad, les fueron reconocidos y titulados a la comunidad indígena del mismo nombre, concediéndose el amparo para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente la Resolución Presidencial reclamada.

Inconformes con lo anterior la comunidad interpuso recurso de revisión, el que mediante ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, dentro del amparo en revisión número 1609/84, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Distrito del Estado de Nayarit, y además de que en lugar de que se declare insubsistente, se pronuncie otra en la que se resuelva lo que en derecho proceda.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos el veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco, emitió opinión en el sentido de que se deberá tener por insubsistente la multirreferida Resolución Presidencial, así como reponer el procedimiento a efecto de que se dicte otra resolución para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

La Delegación Agraria en el Estado de Nayarit, comisionó personal por oficio de trece de agosto de mil novecientos ochenta y siete, para que realizaran trabajos técnicos informativos, con objeto de conocer la situación real respecto de la solicitud de reconocimiento y titulación de bienes comunales, convocándose a la asamblea general por segunda convocatoria, a la que asistieron cuatro presuntos comuneros, y que las autoridades ejidales manifestaron que el hecho de que no asistieron los presuntos comuneros, era porque no radican en el poblado y los que aparecen enlistados como comuneros tienen parcela dentro del ejido "San Pedro Lagunillas".

El veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, la Delegación Agraria en el Estado emitió opinión en el sentido de que no existían posesiones de presuntos comuneros dentro del perímetro señalado en el plano proyecto de reconocimiento y titulación de bienes comunales, por lo cual la Dirección de Bienes Comunales determinó que no procedía la acción por no existir posesiones a título comunal.

El veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y nueve, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen declarando improcedente el reconocimiento de titulación de bienes comunales al comprobarse que no tienen posesión de la superficie controvertida.

El representante del grupo de presuntos comuneros, mediante escrito de veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, solicitó al Cuerpo Consultivo Agrario que hiciera un estudio de los expedientes tanto del ejidal como del comunal para ver si queda una superficie libre en donde se pueda ubicar a los comuneros. Por lo que el Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó acuerdo en sesión de pleno celebrada el dos de mayo de mil novecientos noventa, mediante el cual suspenden los efectos jurídicos del dictamen aprobado el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y nueve y se ordenaron trabajos de localización e identificación que permitan delimitar las acciones de restitución, dotación de tierras y ampliaciones del ejido "San Pedro

Lagunillas”, así como investigar si los posesionarios de las superficies entregadas en distintas acciones al ejido, son ejidatarios o peticionarios del reconocimiento y titulación de bienes comunales.

Por acta de tres de octubre de mil novecientos noventa, se advirtió que son cuarenta y un ejidatarios del poblado “San Pedro Lagunillas”, los que se encuentran en posesión de parcelas y con derechos legalmente reconocidos, veintisiete enlistados como comuneros que no tienen posesión de parcelas o ningún título, cinco enlistados como comuneros sin posesión de parcelas y ausentes del poblado, veinte enlistados como comuneros ya fallecidos, y cuarenta enlistados como comuneros desconocidos en el poblado sin datos de su paradero, estableciéndose en el considerando segundo del acuerdo que se menciona, que en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, al Comisariado Ejidal del poblado “San Pedro Lagunilla”, se realizaron trabajos técnicos informativos de los que se desprende que la comunidad de “San Pedro Lagunillas”, no tiene en posesión terrenos a título comunal y que por lo contrario, de los ciento sesenta y nueve beneficiados en la resolución de reconocimiento y titulación, sesenta y ocho son actualmente ejidatarios del poblado en cuestión, quienes manifestaron su deseo de continuar como ejidatarios, treinta y cinco no tienen posesión de terrenos, cinco están ausentes del poblado, veinte comuneros fallecidos y cuarenta son desconocidos del poblado, declarando inejecutable la Resolución Presidencial de seis de mayo de mil novecientos setenta, mediante la cual se le reconoció y tituló a la comunidad de “San Pedro Lagunillas”.

Mediante escrito de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, la comunidad indígena de “San Pedro Lagunillas”, interpuso recurso de queja, alegando que no se ha dado cumplimiento al fallo dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo número 1604/84, en la que se ordena dejar insubsistente la resolución recurrida y dictar otra en la que se resuelva lo que en derecho proceda, tocándole conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, quien el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, resolvió fundado el recurso de queja, para efecto de declarar insubsistente la resolución reclamada y conforme a las disposiciones a la Ley Agraria, se turnara el expediente a este Tribunal Superior para que procediera a dictar la resolución que en derecho corresponda, respecto a la titulación y confirmación de bienes comunales.

Asimismo, tenemos que la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales fue radicada ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, con sede en Tepic, Estado de Nayarit, autoridad que por sentencia dictada en el juicio agrario 35/93, resolvió en su primer resolutive: “En los términos del considerando último de esta resolución, no se reconocen, ni titulan derechos sobre bienes comunales al poblado ‘San Pedro Lagunillas’, Municipio San Pedro Lagunillas, Estado de Nayarit, por no acreditarse que los solicitantes hayan poseído terrenos bajo este régimen”.

DECIMOCUARTO.- Por auto de once de abril de dos mil dos, este Tribunal Superior Agrario, tiene por radicada la acción de segunda ampliación de ejido que nos ocupa, formándose expediente y registrándose en el Libro de Gobierno del propio Tribunal bajo el número 10/2002, ordenándose notificar a las partes y turnándose el expediente al Magistrado ponente para su resolución correspondiente, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- El requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, quedó satisfecho, al comprobarse que las tierras concedidas al poblado solicitante por la vía de primer ampliación se encontraban totalmente explotadas.

TERCERO.- La capacidad agraria del núcleo de población solicitante, quedó debidamente probada conforme a lo establecido por los artículos 197 fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que de la revisión practicada en la diligencia censal se comprobó la existencia de noventa y siete campesinos capacitados, siendo los siguientes: 1.- Miguel Gómez López, 2.- Francisco Javier López, 3.- Juan Robles Delgado, 4.- Timoteo Bueno Peña, 5.- José López Rodríguez, 6.- Marcelino Robles Andrade, 7.- Benito Soto Castellano, 8.- Luis Michel Rodríguez, 9.- Lorenzo Bueno Pintado, 10.- Guadalupe Jiménez, 11.- Guadalupe Camarena, 12.- Juan Serafín Ramírez, 13.- José Serafín Ramírez, 14.- Ignacio Tejada Flores, 15.- Rogelio Flores Camarena, 16.- Faustino Navarro Delgado, 17.- Jesús Verdín, 18.- Francisco Gutiérrez

Flores, 19.- José Murillo Delgado, 20.- Albino Gutiérrez Flores, 21.- Ramón Serafín Rosales, 22.- José de Jesús Velázquez, 23.- Juan López Rodríguez, 24.- Maximino Murillo Delgado, 25.- Vicente Murillo Delgado, 26.- Jerónimo Serafín Rosales, 27.- Pedro Mora Villaseñor, 28.- Jesús Serafín Rosales, 29.- Agustín Hernández López, 30.- Vicente Valle Ibarra, 31.- Ramón Rodríguez Avalos, 32.- Alberto Ibarra Méndez, 33.- Ignacio Serafín Ramírez, 34.- Juan Rodríguez García, 35.- Carlos C. Rentería, 36.- Juan Ibarra Verdín, 37.- Adalberto Murillo, 38.- Carlos F. Bernal Flores, 39.- Pedro Flores Camarena, 40.- Jerónimo Flores Camarena, 41.- Rodolfo Salvatierra Camarena, 42.- Ramón Luis Valenzuela, 43.- Salvador Flores Rivera, 44.- Angel López Peña, 45.- Marcelino López, 46.- Julián Reynoso Pineda, 47.- Pablo Ibarra Mora, 48.- Anselmo Ibarra Verdín, 49.- José Ibarra Verdín, 50.- Alberto Flores Cortés, 51.- Félix Batista Mendoza, 52.- Aurelio Delgado, 53.- Filiberto Delgado, 54.- Gilberto Becerra García, 55.- Juan Delgado Osegueda, 56.- Felipe Robles, 57.- José Luis Villaseñor, 58.- Sebastián Báez Rubio, 59.- Timoteo Bautista Mendoza, 60.- Arnulfo Becerra García, 61.- Valentín Peña Flores, 62.- Candelario López, 63.- Héctor Valle Delgado, 64.- Alfredo Valle Delgado, 65.- José Rito Peña, 66.- Jesús Rentería, 67.- Ascensión Rentería, 68.- Arturo Murillo Valle, 69.- Gregorio Peña, 70.- Rodolfo Navarro Serafín, 71.- José Delgado Serafín, 72.- Francisco Flores Jiménez, 73.- Ramón López Peña, 74.- Felipe Peña, 75.- Pablo Peña, 76.- Daniel Delgado, 77.- José Rosales Estrada, 78.- Candelario Mora Villaseñor, 79.- Gerardo Lara Delgado, 80.- Manuel Lara Delgado, 81.- José de Jesús Castellano, 82.- Avelino Placencio Cortés, 83.- Francisco Plascencia Cortés, 84.- Ramón Plascencia Cortés, 85.- José María Serafín López, 86.- José Castellón Delgado, 87.- Pedro Acosta Rivas, 88.- Marcelino Lira Tortolero, 89.- Félix Cortés Tortolero, 90.- Manuel Cortés, 91.- José Hernández López, 92.- José Guadalupe Alcántar Robles, 93.- Rosendo Serafín Ramírez, 94.- Maximiano Rosales, 95.- Ramón Velasco Valdez, 96.- Francisco Delgado Osegueda, y 97.- David Delgado Rosales.

CUARTO.- El procedimiento se ajustó a lo dispuesto por los artículos 272, 286, 287, 288, 291, 292 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicable, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.- De las actuaciones del expediente en estudio, consta que se dio debido cumplimiento a lo señalado por el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria, al notificar a los propietarios de las fincas ubicadas dentro del radio de afectación, cumpliéndose así con las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

SEXTO.- De los trabajos técnicos informativos realizados el catorce de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, por el ingeniero José Cruz Ortiz, a los que este Tribunal Superior les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se conoce que se investigaron diversos predios dentro del radio legal y que únicamente resultaba afectable un terreno perteneciente a la ex hacienda de "Lagunillas", propiedad de Ana Rivas de Gil Romero, con una superficie de 2,980-00-00 (dos mil novecientos ochenta hectáreas), que han estado en posesión de los campesinos solicitantes desde hace más de diez años.

Por otro lado, tenemos que la Consultoría Agraria emitió opinión en el sentido de que la ampliación propuesta se ubica dentro de los terrenos reconocidos al poblado "San Pedro Lagunillas" de acuerdo con el proyecto de Resolución Presidencial aprobado el quince de abril de mil novecientos setenta, en la cual se confirma una superficie de 19,776-00-00 (diecinueve mil setecientos setenta y seis hectáreas).

Pero también tenemos que lo anteriormente referido, quedó desvirtuado, toda vez y como se ha hecho referencia en la parte de los resultandos de la presente sentencia, que el Comisariado Ejidal del poblado "San Pedro Lagunillas", interpusieron juicio de garantías en contra de actos del Presidente de la República, Secretario de la Reforma Agraria y demás autoridades agrarias, que hicieron consistir en la emisión de la Resolución Presidencial de seis de mayo de mil novecientos setenta, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el trece de julio del mismo año, en la que se le reconoció y tituló a favor de la comunidad de "San Pedro Lagunillas", una superficie de 19,776-00-00 (diecinueve mil setecientos setenta y seis hectáreas), tocándole conocer al Juzgado de Distrito en el Estado de Nayarit, quien el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, dictó su resolución, concediendo la protección de la Justicia Federal al ejido quejoso, en razón de haber demostrado que los terrenos que fueron concedidos por diversas acciones,

son los mismos que en su mayoría o totalidad, les fueron reconocidos y titulados a la comunidad indígena del mismo nombre, concediéndose el amparo para el efecto de que las autoridades responsables dejaran insubsistente la Resolución Presidencial combatida, sentencia que fue confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, en el amparo en revisión número 1609/84.

Por lo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco, emitió opinión en el sentido de que se deberá tener por insubsistente la multirreferida Resolución Presidencial y reponer el procedimiento a efecto de que se dicte otra resolución.

Por otra parte tenemos que, la Delegación Agraria en el Estado, el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, opinó que no existían posesiones de presuntos comuneros dentro del perímetro señalado en el plano proyecto de reconocimiento y titulación de bienes comunales, situación por la cual la Dirección de Bienes Comunales, determinó que no procedía la acción.

Asimismo, el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y nueve, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen declarando improcedente el reconocimiento de titulación de bienes comunales, al comprobarse que no tiene posesión de la superficie controvertida. En virtud de lo anterior, también se conoce que un grupo de presuntos comuneros, mediante escrito de veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, solicitó al Cuerpo Consultivo Agrario que hiciera un estudio de los expedientes tanto del ejidal como del comunal para verificar si quedaba una superficie donde se pudiera ubicar a los comuneros.

Por acta de tres de octubre de mil novecientos noventa, se conoce que son cuarenta y un ejidatarios del poblado "San Pedro Lagunillas", los que se encuentran en posesión de parcelas y con derechos legalmente reconocidos, veintisiete enlistados como comuneros que no tienen posesión de parcelas o ningún título, cinco enlistados como comuneros sin posesión de parcelas y ausentes del poblado, veinte enlistados como comuneros ya fallecidos y cuarenta enlistados como comuneros desconocidos en el poblado, sin datos de su paradero.

También de autos se advierte, que en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concedió el amparo al Comisariado Ejidal del poblado "San Pedro Lagunillas", que realizaron trabajos técnicos informativos de los que se desprende que la comunidad de "San Pedro Lagunillas", no tiene en posesión terrenos a título comunal y que por lo contrario, de los ciento sesenta y nueve beneficiados en la resolución de reconocimiento y titulación de bienes comunales, sesenta y ocho son actualmente ejidatarios del poblado en cuestión, quienes manifestaron su deseo de continuar como ejidatarios, treinta y cinco no tienen posesión de terrenos, cinco están ausentes del poblado, veinte comuneros fallecidos y cuarenta son desconocidos del poblado.

Por otra parte, tenemos que de autos se advierte que la Comunidad Indígena de "San Pedro Lagunillas", interpuso recurso de queja, alegando que no se ha dado debido cumplimiento al fallo dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo número 1604/84, tocándole conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Nayarit, autoridad que resolvió el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, fundado el recurso de queja, refiriendo que se debería declarar insubsistente la resolución reclamada y turnar el expediente al Tribunal Superior para que procediera a dictar la resolución que en derecho corresponda, respecto a la titulación y confirmación de bienes comunales. Por lo que en acatamiento a lo anterior, fue turnado dicho expediente al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, con sede en Tepic, Estado de Nayarit, autoridad que por sentencia dictada en el juicio agrario 35/93, resolvió que no se reconocían y ni se titulaban derechos sobre bienes comunales al Poblado de "San Pedro Lagunillas", por no acreditarse que los solicitantes hayan poseído terrenos bajo dicho régimen.

En virtud de lo anterior y toda vez como se ha hecho referencia con antelación se conoce que la superficie de 2,980-00-00 (dos mil novecientos ochenta hectáreas), que fue encontrada en posesión de los campesinos solicitantes de la segunda ampliación de ejido del poblado "San Pedro Lagunillas", desde hace más de diez años, según se advierte de los trabajos técnicos realizados el catorce de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, quedó desvirtuado el hecho que dicha superficie se encontraba dentro de los terrenos reconocidos al poblado "San Pedro Lagunillas", de acuerdo a la Resolución Presidencial de quince de abril de mil novecientos setenta, en la que se le confirmaba una superficie de 19,776-00-00 (diecinueve mil setecientos setenta y seis hectáreas), por lo que procede afectar la superficie de 2,980-00-00 (dos mil novecientos

ochenta hectáreas), para satisfacer las necesidades del poblado accionante, de conformidad con los artículos 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, interpretado a contrario sensu, por haber permanecido por más de dos años sin explotación por su propietario.

SEPTIMO.- Por lo anterior es procedente conceder al poblado denominado “San Pedro Lagunillas”, municipio del mismo nombre, Estado de Nayarit, una superficie de 2,980-00-00 (dos mil novecientas ochenta hectáreas) del predio “La Ex hacienda de San Pedro Lagunillas”, propiedad de Ana Rivas de Gil Romero, afectable de conformidad a lo establecido en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, interpretado a contrario sensu, superficie que deberá localizarse de acuerdo al plano que obra en autos, en beneficio de 97 (noventa y siete) campesinos capacitados que se enumeran en el considerando tercero de esta sentencia. Superficie que pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la segunda ampliación de ejido, promovida por campesinos del poblado denominado “San Pedro Lagunillas”, municipio del mismo nombre, Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Es de concederse y se concede al poblado referido en el punto anterior, con una superficie de 2,980-00-00 (dos mil novecientas ochenta hectáreas) del predio “La Ex hacienda de San Pedro Lagunillas”, propiedad de Ana Rivas de Gil Romero, afectable, de conformidad a lo establecido en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, interpretado a contrario sensu, superficie que deberá localizarse de acuerdo al plano que obra en autos, en beneficio de 97 (noventa y siete) campesinos capacitados que se enumeran en el considerando tercero de esta sentencia. Superficie que pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

TERCERO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit; los puntos resolutive de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbese en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscríbese en el Registro Agrario Nacional el que deberá de expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo establecido en esta sentencia.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Nayarit y a la Procuraduría Agraria; ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a nueve de agosto de dos mil dos.- El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno**, **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.